



a. Privación arbitraria o ilícita de la vida

Aunque no hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron asesinatos por motivos políticos, varios miembros de la fuerza policial cometieron algunas ejecuciones ilícitas. La corrupción, la intimidación y la ineficacia de la policía y otras instituciones impidieron la investigación adecuada de muchas de estas ejecuciones, así como el arresto y la persecución exitosa de los autores.

A fines del año, la Policía Nacional Civil (PNC) y su Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) informaron que habían investigado 32 acusaciones de asesinatos en los que estaba implicado el personal de la PNC y un total de 185 agentes. Las investigaciones determinaron que el personal de la PNC fue responsable de las muertes en 18 de los 32 casos, y 14 casos seguían bajo investigación.

El 30 de septiembre, el Tribunal Cuarto de Sentencia condenó al agente de policía José Corado a 25 años de prisión por la ejecución extrajudicial de José Ángel Hernández, ayudante de autobús, quien se encontraba participando en una manifestación de protesta por la violencia contra los conductores de autobuses el 7 de febrero. El 11 de febrero, la PNC arrestó y acusó a otros dos agentes de policía por su participación en el delito; al final del año seguían presos.

El 7 de abril, en la Ciudad de Guatemala, varios hombres desconocidos armados asesinaron a Víctor Rivera, ex asesor del Ministerio de Gobernación y ex jefe del Comando Antisecuestros de la PNC, quien, según informes, trabajaba en la investigación de varios casos destacados. A fines del año estaba pendiente una investigación por parte del Ministerio Público.

El 21 de julio, la PNC arrestó a los detectives Víctor Manuel Alvarado, Nicolás Camaja Bach y Carlos Leonel Costop González de la División de Investigación Criminal (DINC) y los acusó de la ejecución extrajudicial del hijo adulto y del ex esposo de Edilma Navarajo, alcaldesa de Ocós, San Marcos, ocurrida el 29 de junio. Se identificó a otros dos agentes de la DINC como sospechosos en el caso, pero a fines del año no se les había arrestado.

A fines del año, los nueve oficiales de la PNC arrestados como sospechosos en la presunta ejecución judicial de Antonio de León López ocurrida en enero de 2007 en Huehuetenango durante una

operación antinarcoóticos seguían presos, en tanto que un décimo oficial seguía fugitivo.

El 3 de enero, la policía arrestó a Carlos Alberto Gutiérrez ("Montaña 3"), auxiliar del ex alcalde de Jutiapa, Manuel Castillo, por su presunta participación como uno de los autores intelectuales de las ejecuciones de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y de su conductor, en febrero de 2007. A fines del año, Gutiérrez seguía preso. El 29 de agosto, la PNC arrestó a Manuel Castillo, fugitivo por más de siete meses, por su presunta participación en las ejecuciones de los diputados al PARLACEN. A fines del año, Castillo seguía preso y enfrentaba siete cargos, incluso asesinato.

A fines del año, el director y el subdirector de la cárcel de El Boquerón, así como varios oficiales de policía con presuntos vínculos con el narcotráfico en Jutiapa, seguían presos en relación con la ejecución de los cuatro sospechosos de la PNC en el caso del PARLACEN.

El 19 de noviembre, el Tribunal Primero de Sentencia condenó al comisario de la PNC Dionisio Balam, y a los oficiales de la PNC Wilson Tobar Valenzuela y Sabino Ramos Ramírez, a 30 años de cárcel, respectivamente, por la ejecución extrajudicial de cinco presuntos pandilleros en la Ciudad de Guatemala en septiembre de 2007.

No hubo nuevos avances en la investigación de los tiroteos realizados en 2006, uno de los cuales fue mortal, contra cinco travestis en la ciudad de Guatemala.

El 28 de mayo, un tribunal condenó a cinco ex miembros de la Patrulla de Autodefensa Civil (PAC) y los sentenció a 780 años de cárcel, en cada caso, por el asesinato de 177 civiles en Río Negro, Baja Verapaz en 1982. El tribunal ordenó a los acusados que pagaran 100.000 quetzales (\$12.937) a las familias de las 26 víctimas identificadas. También ordenó la captura del ex capitán del ejército José Antonio Solares González, quien permanecía fugitivo a pesar de una orden judicial de arresto expedida en 1999, y de Ambrosio Pérez Laju y Domingo Chen, ex miembros de la PAC. Al final del año, los tres permanecían fugitivos.

La violencia social fue desenfrenada. Los actores no-estatales, vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas, las empresas de seguridad privada y los presuntos grupos "clandestinos" o de "limpieza social" cometieron centenares de asesinatos durante el año.

Los asesinatos y la extorsión de conductores, ayudantes y propietarios de autobuses públicos continuaron sin cesar, lo cual obligó a algunos a abandonar sus casas o aun a huir del país. Hasta diciembre, según la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de Guatemala, 63 conductores de autobús habían sido asesinados en la Ciudad de Guatemala y, según informes, hasta mediados de octubre, 255 conductores y ayudantes de autobús habían sido asesinados en todo el país.

La Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEQUA), una organización no gubernamental (ONG), informó que a fines del año se habían registrado 221 amenazas y otros actos de intimidación contra defensores de derechos humanos, incluso 12 asesinatos. Varios informes también indicaron que ciertos miembros de la policía, tanto antiguos como en servicio, estaban implicados en algunos de los asaltos y otros abusos. Siguieron ocurriendo asesinatos de toda clase, incluso algunos con pruebas de agresión sexual, tortura y mutilación de mujeres. El Grupo Guatemalteco de Mujeres, una ONG, informó que de enero a diciembre, 722 mujeres fueron asesinadas. A fines del año, la PNC informó que se había registrado un total de 6.292 asesinatos, incluso 687 homicidios de mujeres, en comparación con un total de 5.781 asesinatos, incluso 559 homicidios de mujeres, en 2007.

El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) informó que a fines del año se habían registrado 105 asesinatos de niños en todo el país.

El GAM también informó que a fines del año habían ocurrido 138 linchamientos, 19 de los cuales habían causado muertes. Muchos observadores atribuyeron éstos a la continua frustración del público por la falta de acción de las autoridades policiales y judiciales para garantizar la seguridad. Entre las víctimas había funcionarios públicos municipales y oficiales de la policía que habían tomado medidas impopulares en la aplicación de la ley o que habían dejado de aplicarla. También hubo informes de linchamientos comunitarios de personas sospechosas de violar, secuestrar o intentar secuestrar a niños con fines de venderlos para adopción.

El 20 de enero, un grupo de vigilantes en San Juan Sacatepéquez le disparó de muerte a un joven de 17 años, que sospechaban que era pandillero. El grupo también asesinó al hermano y al padre del menor, quienes trataron de interceder.

El 16 de septiembre, varios miembros de la comunidad de San Pedro Yepocapa en Chimaltenango lincharon a un hombre de 22 años acusado de agredir y robar a varios pasajeros en un autobús público y de violar a cuatro mujeres. A fines del año, no se había hecho ninguna investigación del linchamiento ni se habían identificado sospechosos.

El 7 de junio, el Tribunal de Sentencia de Chiquimula condenó a Ingrid Martínez y a Jesús Recinos a 50 años de prisión, respectivamente, por el secuestro y el asesinato de Alba Mishel España Díaz, de nueve años de edad, en junio de 2007. Poco después de la desaparición de España Díaz, una turba linchó a una mujer sospechosa del secuestro de la niña. En 2007 una turba linchó a otra mujer por sospechar que había secuestrado a otro niño.

b. Desaparición

Aunque no hubo informes de desapariciones por motivos políticos, hubo informes de participación de la policía en secuestros con el fin de obtener rescate. La ORP informó que a fines del año había nueve denuncias de secuestro presentadas por el personal de la PNC.

No hubo ningún avance en el caso relacionado con la desaparición de Marcos de Jesús García Sarmiento, guardia de seguridad, del presunto escondite del ex fugitivo Gustavo Herrera, ocurrida en enero de 2007.

No se tuvo noticia de ningún avance en la investigación realizada por el Ministerio Público sobre el secuestro de Marco Tulio Moreno Ramírez realizado en febrero de 2007, según informes, por cuatro hombres armados que llevaban uniformes similares a los de la PNC.

c. Tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes

Aunque la Constitución y la ley prohíben esas prácticas, hubo informes fidedignos de tortura, abuso y otros malos tratos cometidos por miembros de la PNC. Típicamente, las denuncias se relacionaron con el uso de fuerza excesiva durante las operaciones policiales.

El 28 de noviembre, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal inició un juicio contra el comisario de la PNC Elías Lemus Guerra, el subinspector José López Hernández y los agentes Jorge García Ortiz y Dennis Gueiry Godínez por la detención ilegal de Eleázar

Rodas ocurrida el 9 de abril. Los oficiales de la PNC presuntamente amenazaron a Rodas con imputarle falsas acusaciones relacionadas con drogas si no les daba 10.000 quetzales (\$1.294) que llevaba consigo en el momento de su detención. Los oficiales también fueron acusados de robo y abuso de autoridad y seguían presos a fines del año. Según reportes de prensa, al tratar de obtener información sobre una protesta, la policía detuvo y golpeó a dos ayudantes de autobús que habían participado en una manifestación para protestar por la violencia contra los conductores y ayudantes de autobús que tuvo lugar el 7 de febrero.

A fines del año no se tenía conocimiento de ningún avance en la investigación por parte del Ministerio Público sobre los presuntos ataques a golpes cometidos contra tres niños de la calle por soldados asignados a la Brigada de la Policía Militar en 2006.

El 16 de abril, un Tribunal de Quiché sentenció al oficial de la PNC Antonio Rutilio Matías López a 20 años de cárcel, quien estaba detenido por la policía, por la violación agravada de Juana Méndez ocurrida en 2005.

#### Condiciones de las prisiones y centros de detención

Las condiciones de las prisiones siguieron siendo duras y peligrosas. El sistema carcelario seguía sufriendo de una grave falta de recursos, particularmente en cuanto a seguridad carcelaria y servicios e instalaciones de atención médica. Los presos se quejaban de deficiencia en la alimentación y la atención médica. Abundaba la corrupción, particularmente la relacionada con la venta y el uso de drogas ilícitas. Los oficiales carcelarios informaban intentos frecuentes de escape, peleas entre pandillas y otras manifestaciones de inquietud entre los presos. A menudo, los presos empleaban teléfonos celulares para exigir pagos por extorsión y dirigir otras actividades delictivas tanto dentro como fuera de la cárcel. En varias cárceles se instaló equipo para bloquear esas llamadas, pero a fines del año no había terminado la instalación definitiva para activar el equipo.

El hacinamiento en las prisiones siguió siendo una lacra. El registro del sistema carcelario informó que a fines del año había 8.242 personas detenidas en 19 prisiones y cárceles diseñadas con una capacidad de 6.974 personas. Aproximadamente 45 por ciento de la población del sistema penitenciario nacional corresponde a la detención preventiva.

Las medidas de seguridad inadecuadas minaron la capacidad del sistema penitenciario para controlar debidamente a los presos. Según los oficiales carcelarios, había 1.200 guardias carcelarios en todo el país. Según informes, los presos con acceso a teléfonos celulares coordinaron un gran número de los secuestros ocurridos en el país y algunos de los asesinatos de conductores y ayudantes de autobús. Según informes, 16 por ciento de los presos pertenecían a pandillas, que tenían una activa función en las cárceles y, de vez en cuando, atacaban a los guardias carcelarios. Los programas de trabajo y educación en la cárcel eran inadecuados para rehabilitar a los presos y reducir la tasa de reincidencia de 90 por ciento.

Los medios y las ONGs informaron que el abuso físico y sexual contra mujeres y jóvenes prisioneras era un problema serio. Muchas de las jóvenes presas víctimas de abuso eran presuntas pandilleras.

El 1 de mayo, varios pandilleros presos asesinaron a Jorge Augusto Mendoza, subdirector del Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango. Según informes, los presos se amotinaron después de que los oficiales carcelarios detuvieron a dos mujeres que trataron de entrar marihuana a la cárcel para miembros de la pandilla M-18.

El 13 de junio, los pandilleros presos asesinaron a dos compañeros presos y lesionaron a otros cuatro durante una pelea en el Centro de Detención Preventiva para Hombres en Quetzaltenango. Durante la confrontación de tres horas, los pandilleros presos tomaron como rehenes a 28 reclusos que no eran pandilleros y los amenazaron con armas de fuego y granadas.

El 22 de noviembre, varios presos armados, que no eran pandilleros, en el Centro de Detención Preventiva de Pavoncito asesinaron a cinco pandilleros presos y luego decapitaron y quemaron sus cadáveres para protestar por el traslado de los pandilleros desde la cárcel de El Boquerón. Otros dos reclusos murieron durante la confrontación. Según informes, se estima que 100 agentes antimotines de la PNC emplearon cuatro horas en reasumir control de la cárcel y recuperar los cadáveres.

No se tuvo conocimiento de otros adelantos en la investigación del asesinato del preso José de la Cruz Lara Díaz y las lesiones sufridas por el preso Carlos Arturo Escaray por reclusos de la cárcel de Pavoncito en marzo de 2007.

A fines del año, el Ministerio Público seguía investigando el caso registrado en octubre de 2007 con respecto a la guardia carcelaria Irma Barrientos, quien presuntamente prostituía a las reclusas de la cárcel de mujeres en Jalapa y las extorsionaba con una comisión de 30 por ciento del dinero que les enviaban sus familiares.

A fines del año, las autoridades carcelarias no habían tomado medida alguna contra los guardias carcelarios presuntamente implicados en el asesinato de cuatro reclusos jóvenes y las lesiones sufridas por otros cinco pandilleros presos rivales durante un motín ocurrido en el Centro de Detención Juvenil de San José Pinula en 2006.

En raras ocasiones se mantuvo juntos a hombres y mujeres detenidos en instalaciones de inmigración. Los detenidos antes del juicio en ocasiones eran mantenidos en los mismos bloques de la cárcel con la población general de la misma.

El gobierno permitió visitas de vigilancia a las prisiones por grupos locales e internacionales de derechos humanos, la Organización de los Estados Americanos, defensores públicos, grupos religiosos y familiares. Estas visitas se realizaron durante todo el año.

#### d. Arresto o detención arbitrarios

La Constitución y la ley prohíben el arresto y la detención arbitrarios, pero hubo informes fidedignos de arrestos sin órdenes judiciales, de detenciones ilícitas y de incumplimiento de los plazos prescritos en los procedimientos jurídicos. En la práctica, los agentes encargados de la detención a veces no llevaban a los sospechosos ante los jueces de instrucción dentro del plazo de seis horas que exige la ley, y los jueces de instrucción a veces no celebraban una audiencia dentro del plazo de 24 horas que exige la ley.

#### Función de la policía y los cuerpos de seguridad

La PNC, compuesta por 19.671 miembros, encabezada por un director nombrado por el Ministro de Gobernación, siguió teniendo sub-dotación de personal, capacitación inadecuada y financiamiento insuficiente. A fines del año, la PNC informó que se habían registrado 78 muertes de personal de la PNC, 22 en el cumplimiento del deber.

Aunque no había miembros activos de las fuerzas militares en la estructura de mando de la policía, el gobierno siguió empleando a las fuerzas militares para apoyar a las unidades de la policía en respuesta al aumento de la delincuencia. Las operaciones conjuntas de la policía y las fuerzas militares bajo el control operativo de la PNC continuaron en las zonas de mucha delincuencia de la Ciudad de Guatemala, así como en otras regiones del país.

La corrupción policial siguió siendo un problema grave y hubo argumentos fidedignos de participación de determinados agentes de policía y de algunas unidades de policía en actividades delictivas, incluso violaciones, asesinatos y secuestros. Se informó que funcionarios de la policía y de inmigración extorsionaban y maltrataban a las personas que trataban de ingresar al país de manera ilegal.

La impunidad de la policía siguió siendo un grave problema. La PNC trasladaba habitualmente a los agentes sospechosos de mala conducta en lugar de investigarlos y castigarlos.

Hubo informes fidedignos de que funcionarios de la PNC o personas disfrazadas de agentes de la policía detenían automóviles y autobuses para exigir sobornos o robar bienes particulares. En algunos casos, los presuntos agentes de policía agredieron y violaron a sus víctimas.

El 9 de junio, la PNC arrestó a un oficial de policía de alto rango y a tres oficiales de patrulla por su presunta implicación en las actividades de una banda delictiva llamada el "Mariachi Loco" que se dedicaba a perpetrar robos y otros delitos, incluso la detención ilegal de Eleázar Rodas el 9 de abril en la Ciudad de Guatemala. El 28 de noviembre, el Tribunal Décimo de Sentencia Penal inició un juicio contra estos oficiales de la PNC por su presunta participación en la detención ilegal. A fines del año, los oficiales seguían presos.

El 18 de septiembre, la ORP arrestó a los subcomisarios de la PNC por su presunta participación en las actividades de una banda delictiva que operaba en un próspero sector de la Ciudad de Guatemala. A fines del año, otros 12 agentes de policía eran objeto de investigación por parte del Ministerio Público por posible participación en este grupo.

La policía amenazó a las personas dedicadas a la prostitución y a otras actividades sexuales de índole comercial con falsas acusaciones relacionadas con drogas a fin de extorsionarlas por

dinero o favores sexuales y hostigó a los homosexuales y a los travestis con amenazas similares de falsas acusaciones. Los críticos acusaron a la policía de realizar detenciones indiscriminadas e ilícitas al realizar operativos antimaras en algunos barrios con alto índice de delincuencia. Se afirma que los funcionarios de seguridad arrestaban y apresaban a presuntos pandilleros sin imputar cargos, o a veces recurrían a falsas acusaciones relacionadas con drogas.

La ORP realizó investigaciones internas de mala conducta por parte de agentes de la policía. A fines del año, la OPR informó haber recibido 1.510 denuncias (quejas), que comprendieron 12 denuncias de asesinatos, 7 de desapariciones forzadas, 9 secuestros, 8 detenciones ilícitas, 119 robos, 7 violaciones, 150 amenazas y 183 casos de abuso de la autoridad.

Aunque la ORP envió al Ministerio Público para investigación más detallada y para procesamiento los casos con suficientes pruebas de actividad delictiva, pocos casos llegaron a juicio. A fines del año, la ORP había investigado a 185 agentes de policía. La PNC no proporcionó estadísticas sobre la resolución de esos casos, algunos de los cuales continuaban.

La PNC capacitó a 2.810 cadetes en derechos humanos y ética profesional, en comparación con los 2.635 que recibieron esta capacitación en 2007. El ejército exigió que los oficiales que se ocupan de asuntos civiles en cada comando planificaran y documentaran la capacitación en derechos humanos proporcionada a los soldados. A fines del año, 1.035 funcionarios de las fuerzas militares y soldados habían recibido capacitación en derechos humanos.

Aproximadamente dos terceras partes de los distritos de policía seguían con escasa dotación de personal. Los defensores de los derechos indígenas aseveraron que la continúa falta de sensibilidad de las autoridades de seguridad hacia las normas y prácticas culturales de los indígenas daban lugar a malentendidos y que pocos agentes de policía indígenas trabajaban en sus propias comunidades étnicas o lingüísticas.

#### Arresto y detención

La Constitución y la ley exigen que una orden de arresto emitida por un tribunal debe presentarse a un sospechoso antes del arresto, a menos que al sospechoso se le sorprenda en la comisión de un delito. La policía no puede detener a un sospechoso por más de seis horas sin llevar el caso ante un

juez. Con frecuencia, a los detenidos no se les informó con prontitud de los cargos presentados en su contra. Una vez que se ha instruido de cargos a un sospechoso, el fiscal suele tener tres meses para terminar la investigación y radicar el caso ante el tribunal o solicitar una prórroga oficial del período de detención. La ley contiene disposiciones sobre acceso a abogados y fianza para la mayoría de los delitos. El gobierno proporcionó representación legal para los detenidos indigentes, y los detenidos pudieron comunicarse con sus familiares.

A fines del año, la ORP había recibido ocho acusaciones de detención ilegal. No hubo datos fidedignos sobre el número de detenciones arbitrarias, aunque la mayoría de los relatos indicaban que la policía habitualmente hacía caso omiso del auto de habeas corpus en casos de detención ilegal, en particular durante operativos antimaras en los barrios.

En zonas con un alto índice de delincuencia en la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, el gobierno realizó tres proyectos piloto de 24 horas en los tribunales, que redujeron considerablemente el número de casos sobreseídos por falta de mérito o por razones técnicas y aumentaron las tasas de enjuiciamiento en la zona metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Estos proyectos mejoraron la capacidad del gobierno de cumplir con los requisitos jurídicos de llevar a los sospechosos ante un juez dentro de las seis horas siguientes a la detención inicial.

Aunque la ley establece un límite de tres meses para la detención previa al juicio, a los presos con frecuencia se les mantenía detenidos después de la fecha fijada por ley para juzgarlos o dejarlos en libertad. Algunos prisioneros no fueron liberados en forma oportuna después de haber cumplido sus condenas completas debido a que los jueces no emitieron la orden necesaria del tribunal o debido a otros problemas burocráticos. Un juez tiene la discreción de determinar si es necesario o permisible fijar fianza para los detenidos antes del juicio, según las circunstancias de los cargos.

e. Negación de juicio público justo

Aunque la Constitución y la ley brindan un organismo judicial independiente, el sistema judicial con frecuencia no llevó a cabo juicios justos ni oportunos por ineficiencia, corrupción, falta de personal y de fondos e intimidación de jueces, fiscales y testigos. Los delitos más graves no se investigaron ni castigaron. Según estimaciones fidedignas, se procesaron menos

de 3 por ciento de los delitos denunciados y un número aún menor dio como resultado una condena. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dirigida por las Naciones Unidas, estimó que los autores materiales de homicidios recibieron condenas sólo en 7 por ciento de los casos. Muchos casos penales destacados permanecieron pendientes en los tribunales por períodos prolongados puesto que los abogados defensores recurrían a apelaciones y peticiones sucesivas.

Hubo numerosos informes de corrupción, ineficacia y manipulación del organismo judicial. Jueces, fiscales, demandantes y testigos también seguían informando sobre amenazas, intimidación y vigilancia. El fiscal especial asignado a delitos contra los operadores de justicia recibió 129 casos de amenazas o agresión en contra de los funcionarios de la rama judicial, en comparación con 125 en 2007.

En octubre, el Ministerio de Gobernación había asignado 30 agentes de policía al CICIG para ampliar la seguridad, y el Ministerio Público creó una nueva fiscalía evaluada por la CICIG, cuyos integrantes trabajarán bajo la supervisión directa de un fiscal principal de la CICIG. A fines del año, la CICIG seguía con su investigación de 15 casos destacados, dos enjuiciamientos y varios casos relacionados con asesinatos de mujeres, homicidios de conductores y ayudantes de autobús, trata de personas y atentados contra sindicalistas y defensores de los derechos humanos y ejecuciones de personas de estos dos últimos grupos.

Se afirma que el Juez Eduardo Cojulún del Juzgado Undécimo de Primera Instancia recibió amenazas de muerte durante todo el año por su asistencia brindada en el caso presentando ante la Audiencia Nacional Española por Rigoberta Menchú, en colaboración con varias ONG, contra cinco oficiales militares en retiro y dos civiles por presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto interno.

El 11 de marzo, varios asaltantes desconocidos asesinaron a tiros a Ingrid Judith Borrayo, oficial de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, en una calle cercana a su oficina en la Ciudad de Guatemala. Hugo Rolando Toj, un agente de la PNC asignado a la División de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, también fue herido a bala mientras caminaba con Borrayo y murió algunos días después en un hospital.

El 8 de mayo, dos hombres desconocidos armados asesinaron a tiros al Magistrado José Vidal Barillas Monzón, presidente de la Corte de Apelaciones de Retalhuleu, mientras dirigía un vehículo cerca de su residencia. El Magistrado Barillas había presidido casos que implicaban delitos, narcotráfico y conflictos relacionados con tenencia de tierras.

El 14 de julio, varios asaltantes desconocidos asesinaron a tiros a Juan Carlos Martínez, fiscal auxiliar encargado de los delitos contra la vida. Martínez era el fiscal principal en los casos de homicidio de los diputados al PARLACEN y de Víctor Rivera.

Hubo informes fidedignos sobre el asesinato de testigos. No se tiene conocimiento de ningún avance respecto del asesinato de Dalia Evangelina García Illescas, testigo en el juicio por homicidio del agente Jorge Macario Mazariegos de la PNC, ocurrido en febrero de 2007.

La Corte Suprema de Justicia siguió buscando la suspensión de los jueces y realizando investigaciones penales por incongruencias o irregularidades en los casos dentro de su jurisdicción. La Junta Disciplinaria Judicial investigó 914 denuncias de mala conducta y celebró las audiencias correspondientes a 398 denuncias hasta fines de octubre. La Corte Suprema no brindó estadísticas acerca de la resolución de estos casos.

Los fiscales siguieron vulnerables a la intimidación y corrupción y con frecuencia fueron ineficientes.

El organismo judicial consistió de la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de apelación, los juzgados de primera instancia y los jueces encargados de determinar causa probable (con una función similar a la de un gran jurado), así como los tribunales de jurisdicción especial, incluso los juzgados de trabajo y de familia. En todo el país había más de 379 jueces de paz. Algunos de los jueces se especializaban en administrar el derecho tradicional e indígena en los juzgados comunitarios, que se encontraban dentro de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. La Corte de Constitucionalidad, que examina la legislación y las decisiones de los tribunales para determinar su compatibilidad con la constitución, es independiente del resto del organismo judicial.

A fines del año, el Ministerio Público tenía 249 personas en su programa de protección de los testigos. No hubo nuevos adelantos

en el caso de 2006 en el que una testigo protegida por la policía fue asesinada en su casa en Palencia.

#### Procedimientos de juicio

La constitución contiene disposiciones para asegurar el derecho a un juicio público justo, la presunción de inocencia, el derecho de estar presente en el juicio y el derecho de tener un abogado. La ley contiene disposiciones para un convenio declaratorio, la posibilidad de liberación bajo fianza y el derecho de apelación. Paneles de tres jueces emiten los fallos. La ley contiene disposiciones para juicios orales y exige interpretación a su idioma para quienes la necesitan, en particular para el gran número de personas indígenas que no dominan el español. La falta de fondos públicos limitó la debida aplicación de esta exigencia jurídica. El Ministerio Público empleó 18 intérpretes en todo el país, incluso en antiguas zonas de conflicto, y el Servicio de Defensoría Pública empleó 15 defensores públicos bilingües en sitios en los que podían servir de intérpretes, además de defender a sus clientes.

El Ministerio Público, que es semi-autónomo de la rama ejecutiva, puede iniciar un proceso penal por sí mismo o en respuesta a una denuncia. Los grupos particulares pueden participar en el enjuiciamiento de casos penales como demandantes. Las prolongadas investigaciones y las frecuentes mociones procedimentales, empleadas tanto por la defensa como por la fiscalía, con frecuencia dieron lugar a detenciones excesivamente extensas antes del juicio y atrasaron los juicios por meses o años.

#### Presos y detenidos políticos

No hubo informes de presos ni detenidos políticos.

#### Procedimientos y recursos judiciales civiles

La ley no contiene disposiciones sobre juicios por jurado en asuntos civiles. La ley contiene disposiciones sobre medidas correctivas de índole administrativa y judicial en casos de presuntas faltas, incluido el cumplimiento de las órdenes de los juzgados en materia de relaciones familiares, pero hubo problemas en la aplicación de dichas órdenes. Algunos asesinatos fueron el resultado de que la PNC no aplicó las órdenes de protección con prontitud.

#### Restitución de bienes

El 20 de noviembre, el Presidente firmó un acuerdo con los dirigentes del grupo de familias que perdieron parientes durante las masacres de Río Negro a comienzos de los años ochenta, conocido como Coordinadora de comunidades afectadas por la construcción de la represa de Chixoy. En el acuerdo, el gobierno reconoció que habían ocurrido "daños y violaciones" y asumió la responsabilidad de ofrecer reparación del perjuicio a las familias de las víctimas.

f. Injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio o la correspondencia

La constitución y la ley prohíben estas acciones y el gobierno en general respetó estas prohibiciones en la práctica.

El 4 de septiembre, Carlos Quintanilla, ex Secretario de Asuntos Administrativos y Seguridad Presidencial, y Gustavo Solano, ex Secretario de Análisis Estratégico (SAE), renunciaron a sus cargos después del presunto descubrimiento de artefactos de espionaje en las oficinas del Presidente y de la Primera Dama. Dos días después ambos hombres fueron acusados con cargos de espionaje y se convirtieron en fugitivos. Quintanilla se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales el 22 de diciembre y a fines del año estaba bajo arresto domiciliario preventivo en espera del juicio.

El 18 de noviembre, unos desconocidos allanaron la casa de Ruth del Valle, Directora de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos. Del Valle denunció esta invasión como un ataque dirigido a ella en respuesta a su trabajo en derechos humanos. A fines del año, no había nuevos adelantos en el caso.

A fines del año, no había ningún adelanto con respecto al allanamiento de las oficinas de las ONG Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Movimiento Nacional por los Derechos Humanos y Asociación Comunicación para el Arte y la Paz, ocurrido en febrero de 2007.

Sección 2. Respeto por las libertades civiles, incluso:

a. Libertad de expresión y prensa

La constitución y la ley contienen disposiciones sobre la libertad de expresión y prensa y, por lo general, el gobierno respetó estos derechos en la práctica.

Aunque los medios de comunicación independientes, incluidos los medios internacionales, operaron con libertad, se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de opiniones sin restricción del gobierno, hubo informes de que personajes desconocidos con frecuencia amenazaron e intimidaron a miembros de dichos medios. A fines del año, la Fiscalía Especial de Delitos contra los Periodistas y Sindicalistas había recibido 35 denuncias de ataques y otros actos de intimidación contra periodistas, particularmente en las provincias, que incluyeron agresión por parte de la PNC y la Policía de Tránsito. El Ministerio Público informó sobre 10 incidentes de intimidación de periodistas, en comparación con 11 en 2007. En un informe del 10 de septiembre presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se clasificó al país como un "país de riesgo" para los periodistas, a partir de la violencia contra los medios de comunicación y la violación de la libertad de expresión.

En septiembre, el Congreso aprobó una ley que estipula una reducción de 66 por ciento de los impuestos de importación de materiales empleados por las redes públicas de televisión, medida que, según se informa, benefició exclusivamente a Ángel González, un hombre de negocios de nacionalidad mexicana, con residencia en el exterior por varios años, y propietario de cuatro frecuencias de transmisión en la red nacional de televisión de acceso abierto. El Congreso aprobó luego una segunda medida, la Ley de Frecuencias de Televisión, que prohíbe que las dos frecuencias nacionales de acceso abierto que no son de propiedad de González vendan publicidad para cubrir sus gastos. El periodista Gustavo Berganza denunció ambas medidas en columnas de opinión y argumentó que el Congreso aprobó las medidas a cambio de cobertura favorable en las redes de acceso abierto de propiedad de González para los miembros del Congreso y de los partidos políticos que apoyaron las medidas. Los canales de televisión propiedad de González comenzaron a transmitir informes noticiosos desfavorables sobre Berganza en lo que algunos miembros de la sociedad civil tildaron como campaña de difamación.

El 10 de mayo, un asaltante desconocido asesinó a tiros a Jorge Mérida Pérez, corresponsal de Prensa Libre, en su casa de Coatepeque, Quetzaltenango. Mérida había informado sobre la corrupción en el municipio de Coatepeque y la presunta conexión del alcalde con el narcotráfico.

El 18 de julio, según informes, Danilo López, corresponsal de noticias de Prensa Libre, recibió una amenaza de muerte de

Leonor Toledo, ex gobernadora de Suchitepéquez. López había informado sobre la corrupción en la oficina de la gobernadora.

El 27 de julio, asaltantes desconocidos hicieron varios disparos a la casa de Edin Rodelmiro Maaz Bol, corresponsal de noticias de Radio Punto en Cobán.

No hubo ningún adelanto conocido, ni se esperaba ninguno, en el caso del intento de asesinato de Wilder Jordán, corresponsal de *Nuestro Diario*, ocurrido en febrero de 2007, ni en la investigación de las amenazas de muerte anónimas contra el personal de Guatevisión y sus familiares, hechas en marzo de 2007, por la cobertura de los asesinatos de los diputados al PARLACEN por Guatevisión.

El Ministerio Público informó que no tenía más información sobre la herida de bala sufrida en 2006 por el periodista de radio Vinicio Aguilar.

#### Libertad de uso de Internet

No hubo restricciones gubernamentales sobre el acceso a Internet ni informes de que el gobierno vigilara el correo electrónico o las salas virtuales de conversación (*chat rooms*) en Internet. Varias personas y grupos participaron en la expresión pacífica de sus opiniones por medio de Internet, incluso por correo electrónico. La Unión Internacional de Telecomunicaciones informó que en 2007 cerca de 10 por ciento de la población tenía acceso a Internet.

#### Libertad académica y actividades culturales

No hubo restricciones gubernamentales sobre la libertad académica ni las actividades culturales.

#### b. Libertad de reunión y asociación pacíficas

##### Libertad de reunión

Aunque la Constitución y la ley contienen disposiciones sobre la libertad de reunión y, por lo general, el gobierno respetó estos derechos en la práctica, hubo algunos argumentos de uso innecesario de fuerza o de falta de acción por la policía durante manifestaciones violentas. Durante el año, en tres ocasiones diferentes, el gobierno declaró estado de prevención, por lo cual se suspendió la libertad de reunión, el derecho a protestar y el derecho a portar armas en un limitado número de

regiones del país: en mayo para restaurar el orden después de que los camioneros bloquearon las carreteras para protestar por las restricciones sobre las horas en que pueden entrar camiones pesados a la Ciudad de Guatemala; en junio para acabar con las protestas violentas contra la construcción de una nueva fábrica de cemento en San Juan Sacatepéquez; y en octubre para restaurar el orden cuando los vendedores ambulantes de Coatepeque protestaron violentamente contra los intentos de la policía por desalojarlos de su mercado informal.

#### Libertad de asociación

La constitución y la ley contienen disposiciones relativas a la libertad de asociación y, en general, el gobierno respetó este derecho en la práctica.

#### c. Libertad de culto

La constitución establece la libertad de culto y, en general, el gobierno respetó este derecho en la práctica.

El 1 de agosto, el Servicio de Inmigración negó de nuevo la entrada al ciudadano puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, quien alegaba ser el Anticristo y planeaba participar en una conferencia. La iglesia de Miranda estaba inscrita, era reconocida por el gobierno y siguió funcionando en la Ciudad de Guatemala.

#### Abuso y discriminación sociales

No hubo informes de abusos ni de discriminación sociales contra personas por sus creencias o prácticas religiosas ni informes de actos de antisemitismo. La población judía era de 2.000 personas aproximadamente.

Véase una discusión más detallada en el informe internacional sobre la libertad de culto de 2008 (*2008 International Religious Freedom Report*) en [www.state.gov/g/drl/irf/rpt](http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt).

#### d. Libertad de tránsito, personas desplazadas internamente, protección de los refugiados y personas apátridas

La constitución y la ley contienen disposiciones sobre la libertad de tránsito dentro del país, los viajes al extranjero, la emigración y la repatriación y, por lo general, el gobierno respetó estos derechos en la práctica.

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones humanitarias.

La ley prohíbe el exilio forzado y el gobierno no empleó el exilio en la práctica.

#### Protección de los refugiados

La constitución y la ley contienen disposiciones sobre el otorgamiento de asilo o refugio de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, y el gobierno ha establecido un sistema para brindar protección a los refugiados. En la práctica, el gobierno brindó protección contra la expulsión o el retorno de refugiados a países donde su vida o su libertad estarían amenazadas.

Durante el año, el gobierno recibió 20 solicitudes de refugio, pero no concedió protección temporal, asilo ni refugio a nadie.

Sección 3. Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de gobierno

La constitución y la ley contienen disposiciones sobre el derecho de los ciudadanos a cambiar su gobierno de manera pacífica y los ciudadanos ejercieron este derecho en la práctica por medio de elecciones periódicas, libres y justas celebradas por medio del sufragio casi universal para las personas mayores de 18 años de edad. A los miembros de las fuerzas armadas y a la policía no se les permite votar.

#### Elecciones y participación política

En noviembre del 2007, Álvaro Colom del partido de la UNE ganó la carrera presidencial para un período de cuatro años con aproximadamente 53 por ciento de los votos. La misión internacional de observación de la Organización de los Estados Americanos catalogó las elecciones de libres y justas en general. Amnistía Internacional denunció un número estimado de 26 asesinatos de activistas políticos dentro del marco de la elección.

Había 20 mujeres en el Congreso de 158 escaños, dos mujeres en la Corte Suprema de Justicia, una mujer en la Corte de Constitucionalidad y 197 juezas. Había una mujer en el gabinete de 12 miembros. Seis de los 332 alcaldes del país eran mujeres.

Había un miembro indígena del gabinete, un magistrado indígena de la Corte Suprema, 113 alcaldes indígenas y cerca de 20 miembros indígenas del Congreso. El 18 de agosto, un destacado dirigente indígena asumió el cargo de director de la nueva Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

#### Corrupción y transparencia en el Gobierno

La corrupción gubernamental fue percibida en general como un problema grave. Las encuestas públicas observaron falta de confianza en casi todas las instituciones públicas, incluso en las ramas legislativa y judicial. Los indicadores mundiales de gobernanza del Banco Mundial indicaron que la corrupción del gobierno era un problema sumamente grave. El Ministerio Público siguió investigando los cargos de corrupción contra el ex presidente Alfonso Portillo, el ex vicepresidente Reyes López y otros altos funcionarios de gobiernos anteriores.

El 6 de agosto, el Presidente del Congreso Eduardo Meyer del partido gobernante UNE renunció a su cargo después de reconocer el 9 de junio que su secretario particular, Byron Sánchez, había transferido ilegalmente 82,8 millones de quetzales (\$11 millones) de fondos públicos al Mercado de Futuros (MDF), una casa de inversión privada. La Corte Suprema privó a Meyer de su inmunidad parlamentaria el 22 de octubre. Raúl Girón, gerente general y representante legal del MDF, huyó después de incumplir con el plazo del 31 de julio para la devolución del dinero. Girón se entregó voluntariamente a las autoridades judiciales el 22 de agosto y, a fines del año, seguía en el centro de detención preventiva en espera del juicio por los cargos de lavado de dinero y fraude. El Ministerio Público emitió órdenes de arresto a Sánchez y José Conde, ex director financiero del Parlamento, quienes permanecían fugitivos a fines del año. Rubén Darío Morales, parlamentario y ex presidente del Congreso, presuntamente recibió una comisión de 300.000 quetzales (\$39.000) del MDF en 2007 por invertir fondos del Congreso allí. A fines del año, por orden judicial, se restringió el desplazamiento de Meyer a la Ciudad de Guatemala. Meyer enfrentaba cargos de desfalco, malversación de fondos públicos y fraude, y esperaba que el tribunal fijara la fecha para el juicio.

El 17 de septiembre, la policía encontró y arrestó al ex congresista Héctor Loaiza Gramajo, quien estaba escondido desde el 15 de enero cuando se le despojó de su inmunidad parlamentaria al final de su mandato. Loaiza enfrentaba cinco

cargos, incluso lavado de dinero, fraude y evasión de impuestos por su presunta implicación en el robo de camiones cisterna cargados de gasolina en 2006.

El 7 de octubre, después de más de cuatro años de evadir a la justicia, las autoridades mexicanas extraditaron al ex presidente Portillo (2000-2004) a Guatemala para enfrentar cargos de corrupción. Portillo había huido a México en 2004 después de que se le imputaron varios casos de corrupción oficial. Al cabo de algunas horas de su regreso a Guatemala, Portillo fue liberado con una fianza de un millón de quetzales (\$129.366) con la condición de comparecer ante el tribunal una vez al mes y de abstenerse de salir del país.

Los funcionarios públicos que ganan más de 8.000 quetzales (\$1.035) al mes o que manejan fondos públicos están sujetos a las leyes de divulgación financiera. La Contraloría General de Cuentas tiene la responsabilidad de supervisar y aplicar esas leyes. La falta de voluntad política y la impunidad desenfrenada facilitaron la corrupción gubernamental.

La constitución concede a los ciudadanos el derecho de acceso a información pública. El 23 de septiembre, el Congreso aprobó la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que regula el suministro de información en poder de las instituciones públicas y facilita el acceso a la misma. La ley cubre todas las ramas del gobierno y exige que todas las entidades públicas y privadas que reciban fondos públicos respondan a las solicitudes de información presentadas por el público con respecto a sus operaciones y a la administración de recursos. La ley también establece sanciones para los funcionarios que obstruyan el acceso del público a la información.

Sección 4. Actitud gubernamental en relación con la investigación internacional y no gubernamental de presuntas violaciones de los derechos humanos

Por lo general, varios grupos nacionales e internacionales de derechos humanos trabajaron sin restricción del gobierno e investigaron y publicaron sus hallazgos acerca de casos de derechos humanos. Por lo general, los funcionarios públicos se mostraron dispuestos a cooperar y a considerar el punto de vista de esos grupos.

El 5 de marzo, la Corte de Constitucionalidad rechazó por unanimidad la apelación presentada por el ex presidente General Efraín Ríos Montt y afirmó la decisión de un tribunal de

apelaciones para desclasificar cuatro planes militares ejecutados a comienzos de los años ochenta en el momento más difícil del conflicto interno de 36 años en el país. A fines del año, el Ministerio de Defensa buscaba una opinión constitucional sobre la forma de poner en práctica esa decisión.

En una decisión tomada el 26 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al gobierno por la desaparición forzada de María Tiu Tojín y su hija, ocurrida en 1990. La CIDH reconoció que el gobierno había cumplido con algunas de sus recomendaciones, incluso la entrega de una carta de disculpas a la familia de las víctimas, el pago de 2.000.000 quetzales (\$259.000) a los familiares y la construcción de un monumento en memoria de las víctimas. Sin embargo, la CIDH determinó que el gobierno no había hecho lo suficiente por establecer la identidad de los responsables ni por localizar los restos de las víctimas.

Muchas ONG, algunos defensores de los derechos humanos y varios sindicalistas denunciaron amenazas o intimidación por parte de personas desconocidas, muchas con presuntos vínculos con el crimen organizado, empresas de seguridad privada y grupos de "limpieza social", y se quejaron de que el gobierno hizo poco para investigar estas denuncias o para prevenir otros incidentes.

En un informe preliminar después de su visita de febrero, la representante especial de las Naciones Unidas para los defensores de los derechos humanos expresó preocupación por el grado de impunidad y debilidad institucional en el país. Sin embargo, reconoció que se habían tomado medidas favorables que conferirían mayor protección a los defensores de los derechos humanos, tales como la creación de una nueva unidad analítica en el Ministerio de Gobernación para concentrarse en los ataques contra los defensores de los derechos humanos.

La UPDDH destacó los cuatro casos siguientes, entre otros, como ejemplos de violencia e intimidación contra los defensores de los derechos humanos e instó encarecidamente al gobierno a tomar medidas para proteger a quienes trabajan por promover los derechos humanos. A fines del año estaban pendientes las investigaciones por parte del Ministerio Público.

El 31 de marzo, un hombre desconocido armado abordó a un miembro de la diócesis del Obispo Álvaro Ramazzini y le envió una amenaza de muerte al Obispo por medio de ese miembro de la diócesis. El Obispo Ramazzini ha apoyado a las comunidades rurales en los conflictos por el uso de la tierra.

El 1 de agosto, varios hombres desconocidos, enmascarados y armados, amenazaron de muerte al dirigente indígena Amílcar Pop, presidente de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala.

El 7 de agosto, varios asaltantes desconocidos en Colotenango, Huehuetenango, asesinaron a tiros al dirigente comunitario indígena Antonio Morales López. Morales, miembro del Comité de Unidad Campesina, era activista defensor de los derechos de los indígenas y, en particular, defendía los recursos naturales y se oponía a proyectos de minería en Huehuetenango. Había recibido amenazas de muerte de varios grupos delictivos locales.

El 19 de octubre, un familiar de Norma Cruz, directora de la Fundación Sobrevivientes, fue secuestrado en la Ciudad de Guatemala por hombres enmascarados en un vehículo, quienes lo llevaron en dicho vehículo a varios lugares y lo amenazaron de muerte. Lo liberaron poco después cerca de la casa de Cruz. A fines del año, estaba pendiente una investigación por parte del Ministerio Público.

El 24 de abril, el gobierno reemplazó a los escoltas de seguridad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) asignados a ciudadanos particulares, incluso a defensores de los derechos humanos, por agentes de la PNC de la División de Protección Personal. Los defensores de los derechos humanos que recibieron esa protección incluyeron representantes de la Fundación Myrna Mack y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Durante el año, los miembros del personal de la FAFG y sus familiares siguieron recibiendo amenazas de muerte. La FAFG opinó que estas amenazas estaban vinculadas al trabajo de exhumación forense realizado por el grupo para identificar a las víctimas de las masacres durante el conflicto armado interno.

La Fiscalía Especial de Derechos Humanos abrió varios casos nuevos relacionados con amenazas anónimas por teléfono o por escrito, allanamientos, agresiones físicas y vigilancia de las oficinas, las residencias y los movimientos vehiculares. La mayoría de estos casos permanecieron pendientes durante períodos prolongados sin ser investigados, o languidecieron en el sistema judicial puesto que los abogados de defensa presentaban mociones y apelaciones sucesivas para demorar los juicios.

El 2 de junio, un panel de tres jueces del Tribunal de Primera Instancia sentenció a Erwin Gudiel Arias a 20 años de cárcel por el asesinato de José Emanuel Méndez Dardón, hijo del ex

congresista y dirigente de derechos humanos Amílcar Méndez, ocurrido en agosto de 2007. El 1 de octubre, un tribunal de apelación revocó la condena y ordenó un nuevo juicio por causa de deficiencias en la investigación por parte del Ministerio Público. A fines del año, Arias seguía preso en espera del comienzo de un nuevo juicio.

La Oficina del Coordinador Residente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ayudó al gobierno a investigar varios asuntos, incluso amenazas y otros actos de intimidación contra los defensores de los derechos humanos, los conflictos de tierras y la discriminación contra las personas indígenas. El gobierno cooperó con la oficina y otras organizaciones internacionales, incluso la CICIG, y en septiembre prorrogó el mandato de la oficina por otro período de tres años.

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, reelegido por el Congreso en 2007 para un segundo mandato de cinco años, informa al Congreso y vigila los derechos humanos garantizados por la Constitución. Los dictámenes del Procurador no tienen fuerza de ley. La PDH funcionó sin injerencia del gobierno ni de los partidos, tuvo suficientes recursos para realizar su tarea y contó con la cooperación del gobierno.

El Procurador presentó informes y recomendaciones que se divulgaron, incluso su informe anual al Congreso sobre el cumplimiento de su mandato.

La Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), dirigida por Ruth del Valle, tiene la responsabilidad de formular y promover la política de derechos humanos del gobierno, representar al gobierno en casos de abuso de los derechos humanos en el pasado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y negociar resoluciones amistosas en casos llevados ante el tribunal. La COPREDEH asumió una función rectora en la coordinación de la protección policial para varios activistas de derechos humanos y trabajo durante todo el año.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso redacta leyes referentes a asuntos de derechos humanos y ofrece asesoramiento al respecto. Por ley, se exige que todos los partidos políticos representados en el Congreso tengan un representante en la Comisión. Varias ONG informaron que consideraban que la Comisión es un foro público apropiado para promover y proteger los derechos humanos.

El 18 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó una nueva oficina para coordinar el programa de trabajo de derechos humanos del país con las instituciones nacionales, las organizaciones multilaterales y las embajadas; Francisco Cali Tzay, dirigente indígena, fue nombrado director de la oficina.

#### Sección 5. Discriminación, abuso social y trata de personas

La Constitución y la ley prohíben la discriminación por raza, sexo, discapacidad, idioma o condición social. En la práctica, el gobierno frecuentemente dejó de aplicar estas disposiciones por falta de recursos, corrupción y disfuncionalidad del sistema judicial.

##### Mujeres

Los delitos sexuales continuaron siendo un grave problema. La ley penaliza la violación, incluso la violación conyugal y la violación agravada, y establece sanciones de 6 a 50 años de cárcel. El 9 de abril, el Congreso aprobó la *Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer*, que establece castigos por violencia física, económica y psicológica contra la mujer por causa de su sexo. Los fiscales de la Fiscalía de Delitos contra la Mujer, una dependencia especial, señalaron que el número de informes de violaciones había disminuido 10,8 por ciento en relación con el año anterior. Según informes, a fines del año, estaba en curso la investigación de 37 casos de violencia económica y 220 casos de abuso sexual y otras formas de violencia física, iniciada desde la aprobación de la nueva ley.

Era mínima la capacitación o la capacidad de la policía para investigar los delitos sexuales o ayudar a las víctimas de los mismos. El gobierno mantuvo la Unidad Especial de Delitos Sexuales de la PNC, la Oficina de Atención a las Víctimas, la Fiscalía de Delitos contra la Mujer y una dependencia especial de trata de personas y adopciones ilegales dentro de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado. A veces, las víctimas de la violación no denunciaron el delito por falta de confianza en el sistema de justicia y el temor de represalias.

A fines del año, la fiscalía informó que había recibido 5.985 denuncias de delitos sexuales. El gobierno informó sobre 237 condenas de agresores sexuales. El Ministerio Público no proporcionó datos sobre el período promedio de las sentencias y de años de encarcelamiento.

La violencia contra la mujer, incluso la violencia intrafamiliar, siguió siendo un problema común y grave. La ley prohíbe el abuso doméstico. El 23 de mayo, el Ministerio Público inauguró el proyecto llamado "Modelo de atención integral" para coordinar la asistencia jurídica, psicológica y médica a las víctimas de violencia intrafamiliar y delitos sexuales.

La ley contiene disposiciones para la emisión de órdenes de protección contra los supuestos agresores y para brindar protección policíaca a las víctimas, y exige que la PNC intervenga en situaciones violentas en el hogar. Sin embargo, en la práctica, la PNC con frecuencia dejó de responder a solicitudes de asistencia relacionadas con violencia intrafamiliar. Varios grupos de mujeres comentaron que se ha adiestrado a pocos agentes para tratar lo relacionado con la violencia intrafamiliar o para prestar asistencia a las víctimas.

El Instituto de la Defensa Pública Penal siguió prestando asistencia jurídica, médica y psicológica gratuita a las víctimas de la violencia intrafamiliar. Al final del año, el proyecto había atendido 10.506 casos de violencia intrafamiliar.

Según los informes de prensa, el Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, un programa gubernamental subordinado a la Secretaría de Obras Sociales de la Primera Dama, recibió 250 llamadas diarias de esposas y niños golpeados, por medio de sus tres líneas directas de emergencia. Al final del año, el Ministerio Público informó que había recibido más de 12.269 denuncias de violencia contra mujeres y niños, incluso violencia intrafamiliar, violencia económica y delitos sexuales, y enjuició 352 casos, con imposición de sentencias en 283 de ellos.

Los jueces de paz emitieron un número no especificado de órdenes de protección contra los agresores acusados de violencia intrafamiliar y ordenaron que la policía ofreciera protección a las víctimas. Por lo general, la investigación completa y el enjuiciamiento de casos de violencia intrafamiliar y violación tomaron un promedio de un año. Aunque la ley ofrece protección, incluso albergue, a las víctimas de violencia intrafamiliar, en la práctica no hubo suficientes instalaciones para este fin.

La Defensoría de la Mujer Indígena, con sede en la COPREDEH, prestó servicios sociales a las víctimas de violencia intrafamiliar o social, y servicios jurídicos, de mediación y de resolución de conflictos a las mujeres indígenas. Esta oficina

también coordinó y promovió acciones por medio de las instituciones gubernamentales y ONG para prevenir la violencia y discriminación contra las mujeres indígenas, pero no tuvo suficientes recursos humanos ni capacidad logística para desempeñar sus funciones a nivel nacional. No se dispuso de estadísticas fidedignas sobre el número de casos manejados por la oficina.

Hubo 18 enjuiciamientos de asesinatos de mujeres en la Ciudad de Guatemala en 2007. Pocos de ellos llevaron a imponer condenas. A fines del año, no se disponía de cifras actualizadas para 2008.

El Ministerio de Gobernación siguió operando ocho albergues para víctimas de abuso en los departamentos con la mayor incidencia de violencia intrafamiliar. Los centros ofrecieron apoyo jurídico y psicológico y alojamiento temporal. El 25 de noviembre, el Instituto de Defensa Pública Penal de Guatemala inauguró una línea directa de emergencia para ayudar a las mujeres víctimas de violencia física.

Aunque la prostitución es legal, buscar prostitutas e inducir a una persona a la prostitución son delitos que pueden dar lugar a multas o prisión, con sanciones mayores si participan menores. La trata de mujeres y menores, principalmente con fines de prostitución, es ilegal y fue un problema ampliamente reconocido.

La ley no prohíbe el acoso sexual y no hubo estimaciones exactas de su incidencia. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos informaron que el acoso sexual estaba muy difundido, particularmente en las industrias en las que la fuerza laboral era principalmente femenina, como en los sectores de textiles y vestuario. También fue un problema en la fuerza policial. El 21 de septiembre, una mujer fue nombrada jefe de la PNC por primera vez en la historia de la organización. Aunque la ley establece el principio de igualdad de género, en la práctica las mujeres enfrentaban discriminación en el trabajo y tenían menos probabilidades de ocupar cargos gerenciales.

Las mujeres estaban empleadas principalmente en trabajos de bajo nivel salarial en la agricultura, el comercio minorista, el sector de servicios, la industria textil y de vestuario, y el gobierno, y tenían más probabilidades que los hombres de estar empleadas en el sector informal, donde el pago y las prestaciones solían ser más bajos. Las mujeres pueden legalmente poseer, administrar y heredar bienes, al igual que los hombres, incluso en situaciones relacionadas con un divorcio.

La Secretaría Presidencial de la Mujer asesoró al Presidente Colom sobre la coordinación interinstitucional de las políticas que afectan a la mujer y su adelanto. Las actividades de la Secretaría incluyeron seminarios, servicios de extensión e información sobre la discriminación contra la mujer.

Un refugio para mujeres, inaugurado en 2007 en la Ciudad de Guatemala para las víctimas de la violencia, siguió funcionando durante el año, con capacidad para albergar a 20 víctimas y a sus familias por seis meses a la vez.

#### Menores

El gobierno dedicó recursos insuficientes para asegurar los servicios de educación y salud adecuados para la niñez.

El ACNUR informó que había problemas para el registro de nacimientos, particularmente en las comunidades indígenas, porque los sistemas públicos de registro y documentación eran inadecuados. Varios factores culturales, como la necesidad de viajar a zonas urbanas desconocidas y tratar con funcionarios públicos del sexo masculino no pertenecientes a la población indígena, a veces impidieron el registro de las mujeres indígenas y de sus hijos. A veces, la falta de registro impidió el acceso de los niños a los servicios públicos.

Aunque la constitución y la ley contienen disposiciones relativas a la educación gratuita obligatoria para todos los niños hasta el noveno grado, menos de la mitad de la población mayor de 13 años había terminado la educación primaria. El Ministerio de Educación informó que, en 2007, 42 por ciento de los niños que ingresaron al primer grado terminaron el sexto grado y que 45 por ciento de quienes ingresaron al séptimo grado terminaron el noveno grado. Las tasas de terminación de la primaria fueron menores en las zonas rurales e indígenas. Mientras que el niño común no indígena de siete a 17 años de edad había tenido 4,4 años de estudios, los niños indígenas de la misma edad habían tenido un promedio de 3,7 años, según el informe de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2006 preparado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El maltrato infantil seguía siendo una lacra. La Unidad de la Niñez Víctima establecida por la Fiscalía Especial de la Mujer investigó los casos de maltrato infantil. Logró 45 condenas de los 57 casos de maltrato infantil que abrió entre enero y

diciembre. La Secretaría de Bienestar Social, que supervisa los programas de trato, capacitación, educación especial y bienestar de la niñez, proporcionó albergue y asistencia a los niños que fueron víctimas de maltrato, pero en ocasiones colocó a los niños a su cuidado en albergues junto con jóvenes con antecedentes penales. Debido a un sistema público de asistencia social sobrecargado y carente de fondos, hasta fines de septiembre el gobierno había remitido a 245 menores a Casa Alianza, una ONG, de un total de 430 casos manejados por esa organización. Casa Alianza proporcionó capacitación en oficios prácticos, apoyo social y psicológico y albergue temporal para los niños de la calle y los niños víctimas de maltrato.

Las autoridades investigaron y enjuiciaron numerosos casos de secuestro o de compra de niños para ofrecerlos para adopción. Por ejemplo, el 1 de octubre, Karen Evelyn Velásquez García y Gloria Elizabeth Girón fueron arrestadas durante redadas de la policía en Mixco y la Ciudad de Guatemala por su presunta participación en la compra y venta de menores. Las autoridades imputaron que Velásquez estaba involucrada en la venta de por lo menos tres niños para adopción por medio de Internet, incluso de un niño a quien entregó en Panamá.

La prostitución infantil continuó siendo un problema.

En colaboración con Casa Alianza, el gobierno realizó 15 operaciones de rescate hasta fines de septiembre, que dieron como resultado el rescate de 24 menores de 18 años víctimas de explotación sexual. Las autoridades remitieron a los menores rescatados a la Casa Alianza para que recibieran protección y atención allá. El gobierno remitió otros 245 casos a Casa Alianza. Hasta fines de septiembre, Casa Alianza había manejado 24 casos de menores víctimas de explotación sexual y seguía ocupándose de 64 casos de años anteriores. La Secretaría de Bienestar Social manejó 504 casos de protección infantil, incluidos casos de menores víctimas de explotación sexual. De los 88 casos remitidos a Casa Alianza, las autoridades públicas detuvieron a siete presuntos autores materiales, seis de los cuales fueron liberados después en espera del juicio.

Casa Alianza estimó que en la Ciudad de Guatemala había más de 3.000 niños de la calle. En su mayoría, los niños de la calle habían abandonado su hogar después de ser maltratados. Casa Alianza informó que la creciente actividad de reclutamiento por las maras redujo el número de niños de la calle en la capital porque, después de unirse a las maras, esos niños solían vivir con sus compañeros mareros. El GAM informó que 105 menores

sufrieron muerte violenta en todo el país durante el año. Los delincuentes con frecuencia reclutaban niños de la calle con fines de robo, transporte de contrabando, prostitución y actividades ilícitas relacionadas con drogas. Varias estimaciones fidedignas indican que el número de niños pertenecientes a pandillas callejeras llega a 3.000 en todo el país. Las ONG que trabajaban con pandillas y otros jóvenes compartieron su preocupación de que los jóvenes de la calle detenidos por la policía eran objeto de maltrato, incluso de agresión física.

El gobierno manejaba un albergue para niñas en Antigua y uno para niños en San José Pinula. Otros dos albergues en Quetzaltenango y Zacapa atendían tanto a niños como a niñas. Los fondos asignados por el gobierno a sus albergues no eran suficientes, y las autoridades gubernamentales a menudo preferían enviar a los jóvenes a albergues juveniles manejados por Casa Alianza y otras ONG. El gobierno no proporcionó a estas ONG asistencia financiera para sufragar los costos de los albergues. Las autoridades de seguridad encarcelaban a los jóvenes delincuentes en centros separados de detención juvenil.

#### Trata de personas

Aunque la ley prohíbe la trata de personas, hubo informes de trata de personas con destino al país y procedente, a través y dentro del mismo. La ley penaliza todas las formas de trata, define las categorías de personas responsables de delitos de trata y establece condenas de prisión de seis a 12 años para los culpables de trata. El gobierno señaló que la trata era un problema grave.

El país fue lugar de procedencia, punto de tránsito y lugar de destino de ciudadanos nacionales y de otros centroamericanos víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

Las mujeres y los niños fueron objeto de trata dentro del país con fines de explotación sexual; se realizó también trata de niños para explotación laboral, que incluyó redes de limosneros en la Ciudad de Guatemala, pero no hubo estimaciones fidedignas de la magnitud del problema. La ONG Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes (ECPAT) señaló que los niños de ocho a 14 años de edad eran vendidos por 750 a 1.500 quetzales (\$97 a \$194) para trabajar en diversas actividades económicas, pero principalmente con fines de explotación sexual.

Según la ECPAT, es probable los incidentes de trata de personas y venta de niños con fines de explotación sexual hayan aumentado por causa de las mayores tasas de desempleo y del mayor número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza.

La trata constituyó un problema particularmente en los pueblos situados a lo largo de las fronteras nacionales. Los niños migrantes que no cruzaban la frontera a México, con frecuencia permanecían en el país y recurrían a la prostitución o eran forzados a practicarla. Muchas mujeres y niños también eran llevados al país procedentes de El Salvador, Nicaragua y Honduras por redes organizadas que los obligaban a ejercer la prostitución. Los principales grupos objetivo para la explotación sexual eran niñas y mujeres jóvenes de familias pobres.

Las organizaciones dedicadas a la trata incluían desde negocios familiares hasta redes internacionales muy bien organizadas. Los propietarios de los burdeles con frecuencia eran los responsables de transportar y emplear a las víctimas de la trata. Los tratantes con frecuencia tenían vínculos con otras clases de crimen organizado, incluso con tráfico de drogas y de migrantes.

Los tratantes a menudo se acercaban a las víctimas con promesas de recompensa económica, trabajos en cafeterías o salones de belleza, o empleo en otros países. Usaban volantes, anuncios en diarios y recomendaciones verbales o personales.

El Ministerio Público mantenía una unidad especial dentro de la Fiscalía del Crimen Organizado para investigar y enjuiciar la trata. Un grupo especial, formado por el Ministerio Público, las autoridades de inmigración, la PNC y Casa Alianza, realizó un número no especificado de redadas en bares y otros establecimientos comerciales.

Las unidades de la PNC y del Ministerio Público responsables de combatir la trata tuvieron una grave escasez de personal y de fondos. A fines del año, la Unidad Especial contra la Trata de Personas perteneciente al Ministerio Público recibió e investigó 136 casos de trata, en comparación con 51 durante los siete primeros meses de 2007. Durante el año, el Ministerio Público enjuició y los tribunales sentenciaron a una persona por delitos de trata.

Hubo informes fidedignos de que algunos agentes de la policía y del servicio de inmigración eran cómplices de la trata de

personas. La ECPAT informó que algunos menores víctimas de trata sostuvieron que las autoridades de inmigración aceptaban sobornos de los tratantes, les daban a las víctimas documentos de identificación falsos y les permitían que cruzaran las fronteras. Hubo informes fidedignos de que algunos propietarios de burdeles permitían que agentes de policía y funcionarios de inmigración tuvieran relaciones sexuales con las víctimas menores sin cobrarles. Casa Alianza informó que los propietarios de negocios de masajes y otros establecimientos dedicados a la explotación sexual de adolescentes tenían buenas relaciones con autoridades gubernamentales que advertían a los negocios cuando la policía iba a hacer redadas.

La Secretaría de Bienestar Social del gobierno administró albergues en Antigua, San José Pinula, Quetzaltenango y Zacapa que ofrecían refugio a las víctimas de trata, además de asistencia social, capacitación laboral y consejería. Durante el año, el albergue de la ONG Casa del Migrante atendió a 49 víctimas de la trata de personas, incluso varios casos relacionados con menores.

Por lo general, los funcionarios de inmigración deportaban a los adultos extranjeros que habían sido víctimas de trata y no los trataban como delincuentes. Los funcionarios de inmigración deportaron a Honduras, Nicaragua y El Salvador a un número indeterminado de mujeres que fueron halladas en redadas en bares. No se enjuició a las víctimas ni se les exigió atestiguar contra los tratantes.

La Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y sus Delitos Conexos, dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como ONG y organizaciones internacionales, coordinó iniciativas para combatir la trata.

El gobierno prestó mayor atención al rescate de menores de la explotación sexual con fines comerciales en bares, burdeles y otros establecimientos. Los menores fueron enviados a Casa Alianza, donde se les proporcionó albergue, atención médica, consejería psicológica y capacitación laboral. Otras ONGs les ofrecieron servicios similares y, junto con Casa Alianza, abogaron por legislación, protección de las víctimas y prevención de la trata.

El país cooperó con México para ayudar a las víctimas. Esta cooperación incluyó asegurar que la repatriación de las víctimas de la trata se manejara de forma separada de las deportaciones.

El país tenía convenios de repatriación de menores víctimas de la trata con El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.

El Ministerio Público trabajó con la ECPAT para capacitar a los funcionarios públicos en el tema de los delitos de explotación sexual y comercial con hincapié en la trata de niños. La ECPAT dictó numerosos cursos a más de 320 funcionarios públicos en todo el país, incluso a empleados del Instituto Nacional de Turismo.

El informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas, titulado *Trafficking in Persons Report* puede consultarse en [www.state.gov/g/tip](http://www.state.gov/g/tip).

#### Personas con discapacidades

La constitución no contiene prohibiciones específicas contra la discriminación por discapacidades físicas en el empleo, la educación, el acceso a la atención de salud o la prestación de otros servicios públicos. Sin embargo, la ley exige igualdad de acceso a instalaciones públicas y contiene disposiciones sobre algunas otras clases de protección legal. En muchos casos, las personas con discapacidades físicas y mentales no gozaron de estos derechos, y el gobierno destinó pocos recursos al combate de este problema.

Eran mínimos los recursos para la educación de las personas con necesidades especiales y la mayoría de las universidades carecía de vías de acceso para las personas con discapacidades. El Hospital Nacional de Salud Mental, el principal proveedor de servicios de atención de salud a las personas con enfermedades mentales, no tenía suficientes suministros básicos, equipo, condiciones de vida higiénicas y una dotación adecuada de personal profesional. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, compuesto por representantes de los Ministerios y organismos gubernamentales pertinentes, celebró reuniones ordinarias para discutir iniciativas, tuvo un presupuesto de 5,5 millones de quetzales (\$712.000) y estimó que había 1,2 millones de personas con discapacidades en el país.

#### Personas indígenas

Personas indígenas de 22 grupos étnicos constituyeron cerca de 43 por ciento de la población. Además de las numerosas comunidades mayas, también están los garífunas, descendientes de africanos llevados a la región del Caribe como esclavos que

contrajeron matrimonio con los amerindios, y la comunidad indígena xinca. La ley manda que las personas indígenas gocen de igualdad de derechos y obliga al gobierno a reconocer, respetar y fomentar sus estilos de vida, costumbres, tradiciones, organización social y forma de vestir.

Aunque algunas personas indígenas lograron altos cargos como jueces y funcionarios públicos, en general estaban subrepresentados en la política y permanecían bastante fuera de la corriente política, económica, social y cultural del país debido a sus escasas oportunidades educativas, pobreza, falta de conocimiento de sus derechos y discriminación generalizada. Aunque la población indígena aumentó su participación política, algunos representantes de la sociedad civil se preguntaron si esa participación había dado como resultado una mayor influencia en la estructura de los partidos políticos nacionales.

La ONG Derechos Humanos Primero señaló una tendencia a penalizar los movimientos sociales, en particular, las movilizaciones comunitarias en contra de proyectos industriales en gran escala con posibles efectos desfavorables para los medios de vida de su comunidad. Varios miembros de las comunidades indígenas de San Juan Sacatepéquez han sido arrestados en los últimos años por oponerse a la construcción de una fábrica de cemento. En julio, las autoridades emitieron órdenes de arresto a ocho personas como resultado de una diferencia entre un hacendado y una compañía de explotación minera, la segunda vez en 18 meses que se escogió como objetivos del arresto a los residentes que se oponían a las operaciones de la mina. A fines del año, no había nuevos adelantos en el caso.

Según el informe de la ENCOVI de 2006 preparado por el INE, 51 por ciento de la población vivía en la pobreza. De la población que vivía en la pobreza, 56 por ciento era indígena.

Las personas indígenas de las zonas rurales tenían pocas oportunidades educativas y menos oportunidades de empleo. Muchos de los indígenas eran analfabetos y cerca de 29 por ciento no hablaban español, según el informe de la ENCOVI de 2006 preparado por el INE. Más del 50 por ciento de las mujeres indígenas mayores de 15 años eran analfabetas y un número desproporcionado de niñas indígenas estaba fuera del sistema escolar. Según el Ministerio de Educación, 76.232 niños indígenas de edad preescolar y de kindergarten estaban matriculados en programas de educación bilingües en español y un idioma indígena.

El Departamento de Pueblos Indígenas del Ministerio de Trabajo, que tenía la responsabilidad de investigar casos de discriminación y de representar los derechos indígenas, asesoraba a las personas indígenas con respecto a sus derechos. Este Departamento tenía un presupuesto de 40.000 quetzales (\$5.175), solamente cuatro empleados y pocos recursos para investigar las denuncias de discriminación.

Rara vez había intérpretes disponibles en los tribunales para los procesos penales como lo mandaba la ley, y ello colocaba en desventaja a las personas indígenas arrestadas por delitos en vista de que a veces su comprensión del español era limitada. Había un magistrado indígena de la Corte Suprema y 114 jueces que hablaban lenguas mayas en los 561 tribunales del país. Había 84 intérpretes en los tribunales, incluso 44 hablantes bilingües de lenguas mayas, y la Corte Suprema de Justicia informó que el sistema judicial tenía 907 empleados que hablaban idiomas indígenas. En muchos casos, se siguió asignando personal judicial bilingüe a campos en los que no se hablaba su segundo idioma.

#### Otros abusos sociales y discriminación

La ley no penaliza la homosexualidad ni incluye expresamente la orientación sexual entre las clasificaciones por las cuales se prohíbe la discriminación. Hubo discriminación social contra los hombres y mujeres homosexuales y las personas transexuales. Los grupos de apoyo de los derechos de los homosexuales argumentaban que los agentes de policía habitualmente esperaban fuera de los clubes y bares frecuentados por las minorías sexuales y exigían que los clientes y las personas que participaban en actividades sexuales con fines comerciales les pagaran por protegerlos. Debido a la falta de confianza en el sistema judicial y por temor de sufrir mayor persecución o recriminación social, las víctimas no estaban dispuestas a presentar demandas.

La ley no incluye expresamente el estado de infección por el VIH entre las clasificaciones por las cuales se prohíbe la discriminación y hubo discriminación social de las personas infectadas por el VIH/SIDA.

#### Sección 6. Derechos de los trabajadores

##### a. El derecho de asociación

Aunque la ley contiene disposiciones sobre la libertad de asociación y el derecho de formar sindicatos y pertenecer a

ellos, en la práctica la aplicación seguía siendo débil e ineficaz. Los trabajadores siguieron viviendo bajo la amenaza de sus empleadores y los sindicatos se debilitaron por falta de aplicación de las leyes de trabajo y empleo y la violencia contra los sindicalistas y activistas laborales. Los sindicatos locales e internacionales y los grupos defensores de los derechos laborales señalaron un marcado incremento en el número de asesinatos de activistas sindicalistas y sus familiares, en comparación con los años anteriores, y criticaron la aplicación por parte del gobierno de los reglamentos antiterrorismo contra los sindicatos y los sindicalistas.

La UPDDH informó que, a fines del año, 47 sindicalistas habían sido atacados y tres asesinados por asaltantes desconocidos. En general, fue difícil descubrir los motivos de los asesinatos puesto que, en su mayoría incluían homicidios de dirigentes laborales, no se investigaban bien y no se enjuiciaban. Los sindicatos locales pidieron encarecidamente la investigación de los asesinatos de los sindicalistas y mayor seguridad para los dirigentes y miembros de los sindicatos. Una petición presentada al amparo del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que cubría a los seis sindicatos locales, afirmaba que el gobierno no había hecho cumplir a cabalidad sus leyes laborales con respecto a la libertad de asociación, al derecho de organización y negociación colectiva, y a condiciones de trabajo aceptables en cinco casos. En un examen de la petición se observó que a pesar de los recientes esfuerzos desplegados por el gobierno para mejorar la aplicación de las leyes laborales, seguía habiendo notables debilidades en la capacidad del gobierno para hacer cumplir sus leyes laborales.

El 2 de marzo, unos asaltantes armados asesinaron a Miguel Ángel Ramírez Enríquez después de entrar a su casa por la fuerza. Ramírez era uno de los fundadores del SITRABANSUR (Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur). Cuatro meses después de su fundación, el sindicato fue oficialmente reconocido en noviembre de 2007. Según el SITRABANSUR, la administración de la compañía recibió una lista de los nombres de todos los trabajadores participantes en la formación del sindicato y se informa que por medio de su sistema de seguridad privada amenazó a los miembros en el trabajo y en la casa. A fines de noviembre, fueron despedidos. Ramírez estuvo entre los trabajadores a quienes se presionó para que firmaran una carta de renuncia. A fines del año, estaba pendiente una investigación por parte del Ministerio Público.

El 29 de abril, Carlos Enrique Cruz Hernández, miembro activo del SITRABI (Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal), fue asesinado en su lugar de trabajo. Se informa que dos personas desconocidas entraron al lugar donde estaba almorzando y le dispararon. El asesinato ocurrió justamente una semana después de la reunión del 23 de abril del sindicato con el Ministerio de Gobernación para quejarse de que varios asaltantes armados y enmascarados habían intimidado y amenazado a Danilo Méndez, otro miembro del SITRABI. A fines del año, estaba pendiente una investigación por parte del Ministerio Público.

El 8 de junio, un asaltante desconocido le disparó a Freddy Morales Villagrán, miembro del Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Distribuidora del Petén y lo hirió de gravedad. Villagrán murió de sus lesiones algunas semanas después. El ataque se produjo en medio de los intentos hechos por el sindicato para que la Corporación Castillo Hermanos lo reconociera, para lograr la reincorporación de los dirigentes y miembros del sindicato que, por lo que se presume, fueron ilegalmente despedidos y para poner en tela de juicio los esfuerzos de disolución de la corporación hechos por ella misma.

El 7 de agosto, en Puerto Barrios, Izabal, dos asaltantes desconocidos asesinaron a tiros a Edvin Portillo, tesorero de la Junta de Administración de Prestaciones y miembro del sindicato obrero de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás. Según informes, Portillo había estado recolectando firmas para una petición que los trabajadores iban a presentar el día del asesinato, expresando su oposición al nuevo auxiliar del subdirector de operaciones marítimas. A fines del año estaba pendiente una investigación por parte del Ministerio Público. Con excepción de los miembros de las fuerzas de seguridad, todos los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos o a pertenecer a ellos, pero sólo 8 por ciento de los trabajadores del sector formal estaba sindicalizado.

Los dirigentes laborales denunciaron que habían recibido amenazas de muerte y que eran blanco de otros actos de intimidación. Una Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas, formada por tres fiscales, dentro de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, aceptó varios casos nuevos relacionados con sindicatos durante el año. Se impuso una condena por un delito contra un sindicalista. El sector laboral organizado consideró que la reestructuración de la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas era indicio de que el compromiso de enjuiciar los delitos contra sindicalistas era menos firme. El 6 de noviembre, el Ministerio

de Trabajo reactivó la Comisión de Trabajo Multiinstitucional para las Relaciones Laborales, creada en 2003 para investigar los casos de violencia contra los sindicalistas.

No se tuvo conocimiento de ningún adelanto en los siguientes casos pendientes desde 2007: el asesinato de Pedro Zamora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, ocurrido en enero; los asesinatos de los vendedores ambulantes Wálter Aníbal Ixcaquic Mendoza y Norma Sente de Ixcaquic, miembros del Sindicato de la Sexta Avenida del Frente Nacional de Vendedores de Guatemala, ocurridos en febrero; y el asesinato de Marco Tulio Ramírez Portela, dirigente del SITRABI y hermano de Noé Ramírez, Secretario General del SITRABI, ocurrido en septiembre.

Hasta comienzos de diciembre, el Ministerio de Trabajo había concedido personería jurídica a 53 sindicatos nuevos, en comparación con 36 en 2007. En su mayoría, los nuevos sindicatos eran pequeños y estaban localizados en las provincias, sobre todo en el sector agropecuario o municipal. Aunque hubo 1.882 sindicatos laborales legalmente inscritos, 597 parecieron estar activos a fines del año, de acuerdo con los registros administrativos.

A fines del año, un activo movimiento de asociación solidarista conocido como "Solidarismo" declaró que tenía 83 asociaciones con unos 30.000 miembros y 90 asociaciones independientes con unos 50.000 miembros. Los sindicatos pueden actuar legalmente en sitios de trabajo que tienen asociaciones solidaristas, y los trabajadores tienen el derecho de escoger entre pertenecer a una de ellas o a ambas. Aunque la ley estipula que los sindicatos comerciales tienen el derecho exclusivo de negociar condiciones de trabajo a nombre de los trabajadores, los sindicatos sostuvieron que la gerencia promovía las asociaciones solidaristas para desalentar la formación de sindicatos o competir con los existentes.

Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga, pero debido al bajo grado de sindicalización y a las dificultades en materia de procedimientos, hubo solamente dos huelgas legales, según el departamento de estadística de la rama judicial. Sin embargo, los maestros, los trabajadores de atención de salud, los agricultores y otros grupos laborales organizaron varias protestas, marchas y manifestaciones, en las cuales participaron durante todo el año.

La ley faculta al Presidente y su gabinete para suspender cualquier huelga que se considere "gravemente perjudicial para las actividades y los servicios públicos esenciales del país." Los trabajadores de los sectores de servicios esenciales y públicos pueden atender las quejas con mediación y arbitraje por medio de la Inspectoría General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y también directamente por medio de los juzgados de trabajo. Los empleadores pueden suspender o despedir a los trabajadores por ausentarse sin permiso si las autoridades no han reconocido una huelga como legal. La ley exige arbitraje vinculante si no se ha logrado acuerdo después de 30 días de negociación. La ley prohíbe represalias del empleador contra los huelguistas participantes en huelgas legales. El sector laboral organizado protestó por el uso de argumentos referentes a intereses de seguridad nacional y a situaciones de emergencia por parte del gobierno para prohibir lo que dicho sector consideró huelgas "legales", como la protesta de los camioneros en la primavera y las manifestaciones de los maestros y los trabajadores de atención de salud. Criticó los arrestos, los encarcelamientos y la imposición de multas contra los manifestantes y consideró que esos actos eran violaciones de las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de huelga.

En la encuesta anual de la Confederación Sindical Internacional (CSI) correspondiente a 2008 se determinó que había falta de inspecciones laborales, debilidad del sistema judicial e impunidad. En la encuesta se informó que, según los trabajadores, los inspectores se mostraban más dispuestos a persuadirlos de que renunciaran a sus derechos que a protegerlos y a menudo alertaban previamente de sus visitas a los empleadores. Los juzgados de trabajo tenían un volumen acumulado de solicitudes para la reincorporación de trabajadores y los casos pueden durar más de diez años. Los empleadores tendían a hacer caso omiso de los fallos de los tribunales y estos últimos no tomaban medidas para asegurarse de que se respetaran sus decisiones. En abril, una misión de asistencia técnica de la OIT llegó a la conclusión de que el Ministerio de Trabajo era muy débil y esa situación había empeorado desde que la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo en 2004 a efectos de que no podía imponer sanciones a los empleadores por violaciones de las leyes laborales.

b. El derecho de organización y negociación colectiva

La ley permite que los sindicatos realicen sus actividades sin injerencia. El gobierno trató de proteger ese derecho en la

práctica, pero tenía pocos medios para hacerlo. La ley exige que los miembros de los sindicatos aprueben un acuerdo de negociación colectiva por mayoría simple. Aunque los trabajadores tenían el derecho de organizarse y negociar en forma colectiva, el pequeño número de trabajadores sindicalizados limitó la práctica de la organización y la negociación.

En su mayoría, los trabajadores, incluso los organizados en sindicatos, no tenían contratos colectivos que documentaran sus salarios y condiciones de trabajo, ni contratos individuales como lo exige la ley. Esto se debió en gran parte a un conjunto de factores, entre ellos, la existencia de sindicatos apoyados por los empleadores, el cese del empleo o el despido de sindicalistas, el desacato de las órdenes o los fallos de reincorporación emitidos por los tribunales que exigen que el empleador negocie con los sindicatos reconocidos, y las amenazas y manipulaciones dirigidas a los trabajadores subcontratados (por ejemplo, amenazas de que no se les renovará un contrato o no se les ofrecerá empleo permanente si ingresan a un sindicato o se niegan a cancelar su afiliación al mismo).

El Ministerio de Trabajo informó que había 27 nuevos acuerdos de negociación colectiva, incluso acuerdos suscritos con los maestros y los trabajadores de atención de salud durante el año. Estos acuerdos se lograron después de años de negociaciones y después de numerosas manifestaciones de maestros en todo el país.

Las observaciones del Comité de Expertos (COE) de la OIT señalaron varias violaciones de acuerdos de negociación colectiva, actos de injerencia de los empleadores, actos de discriminación de los sindicatos y un reducido número de sanciones gubernamentales impuestas por violaciones laborales.

El reconocimiento jurídico de un nuevo sindicato que abarque a toda una industria exige que 50 por ciento más uno de los trabajadores de esa industria pertenezcan al mismo. El COE declaró que esta exigencia limita la libre formación de sindicatos. Los activistas de los derechos laborales consideraron que esta cifra constituía una barrera prácticamente insuperable para la formación de nuevos sindicatos en toda una industria, lo cual en efecto eliminó la posibilidad de que los trabajadores ejercieran el derecho de negociar y hacer que los empleadores participaran oficialmente en el plano industrial.

Era débil el cumplimiento de las prohibiciones legales sobre la retribución por formar sindicatos y por participar en actividades sindicales. Habitualmente, muchos empleadores buscaban evadir las disposiciones legales para la organización de sindicatos demostrando resistencia a los intentos para su formación o haciendo caso omiso de las órdenes judiciales de aplicación. La existencia de castigos inadecuados para las violaciones y de un sistema jurídico ineficiente para hacer cumplir las sanciones siguió minando el derecho a formar sindicatos y a participar en actividades sindicales.

El aumento de la violencia y la inseguridad redujo todavía más la capacidad de los trabajadores de ejercer libremente sus derechos laborales. Los sindicatos locales informaron una mayor incidencia de declaraciones fraudulentas de bancarrota, sustitución de propiedad y nueva matrícula de compañías por empleadores que buscaban evadir su obligación legal de reconocer a los sindicatos recién formados o ya establecidos. Las instituciones gubernamentales siguieron tolerando esas prácticas. La demora en el trámite de las denuncias legales, desde su presentación hasta su resolución definitiva, se tradujo en inmunidad para los empleadores.

Hubo informes fidedignos sobre represalias de los empleadores contra los trabajadores que intentaron ejercer los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Las prácticas comunes consistían en el despido y hostigamiento de los trabajadores que intentaban formar sindicatos en las empresas, la creación de sindicatos ilegales apoyados por la empresa para contrarrestar los sindicatos legalmente establecidos, la colocación de los organizadores de sindicatos en una "lista negra", la amenaza de cerrar fábricas, la renuencia a permitir que los inspectores de trabajo ingresaran a las instalaciones a investigar las quejas de los trabajadores, y la renuencia a honrar las decisiones tomadas por los juzgados de trabajo a favor de los trabajadores, incluida la reinstalación de los organizadores de sindicatos ilegalmente despedidos.

La ley exige que los patronos reinstalen a los trabajadores despedidos ilegalmente por sus actividades en la organización de sindicatos. En la práctica, los empleadores con frecuencia incumplieron las órdenes de reincorporación. Durante el año, los trabajadores afectados por despido ilegal ganaron 571 mandatos judiciales de reincorporación. Las apelaciones introducidas por los empleadores, junto con el uso de recursos legales como la constitución de la empresa como una entidad distinta, con frecuencia prolongaban los procesos de reincorporación. Los

juzgados de trabajo rara vez sobreyeron los casos o apelaciones frívolos y no obraron de manera oportuna ni aseguraron la aplicación de sus decisiones. De acuerdo con funcionarios del Ministerio de Trabajo, las autoridades rara vez disciplinaron a los empleados por hacer caso omiso de órdenes judiciales legalmente vinculantes. Los empleadores con frecuencia incumplieron con el pago del monto total de las indemnizaciones a los trabajadores como lo exige la ley.

Con frecuencia cada vez mayor, los sindicatos locales señalaron las violaciones cometidas por los empleadores que dejaban de pagar sus propias contribuciones y las de los empleados al sistema nacional de seguro social, a pesar de las deducciones por concepto de contribuciones de los empleados hechas de los cheques de pago de estos últimos, y protestaron contra dichas violaciones. Estas violaciones, particularmente comunes en las industrias del sector privado y de exportación, llevaron a limitar o a negar el acceso de los empleados al sistema de atención de salud pública y a reducir o pagar en menor proporción las prestaciones por concepto de pensiones de los trabajadores durante sus años de jubilación.

No hubo leyes especiales ni exenciones de las leyes laborales ordinarias en las 16 zonas activas de procesamiento para exportación (ZPE) ni dentro de las fábricas de vestuario que funcionaban con un régimen similar a las ZPE. Debido a la inadecuada aplicación de las leyes laborales y las medidas, con frecuencia ilegales, adoptadas por los empleadores para evitar la formación de nuevos sindicatos o minar los sindicatos existentes, hubo poco éxito en la organización de los trabajadores en las ZPE y en el sector de vestuario. Algunas fábricas cerraron y volvieron a abrir con un nuevo nombre y con un nuevo estado de exoneración tributaria. De las 216 compañías en funcionamiento en las ZPE, sólo tres habían reconocido a los sindicatos y ninguna tenía acuerdo de negociación colectiva. SitraCima y SitraChoi, dos sindicatos del sector de vestuario, quedaron prácticamente eliminadas por medidas presuntamente ilegales tomadas por el empleador y la falta de acción del gobierno para hacer cumplir las leyes de trabajo, empleo y bancarrota. El gobierno no realizó inspecciones de trabajo periódicas en las ZPE, y hubo violaciones de las leyes sobre salarios y horarios, horas extras trabajadas de manera obligatoria sin pago adicional, despidos de trabajadores que intentaban formar sindicatos, retención de los pagos del seguro social y pruebas ilegales de embarazo. Las observaciones del COE señalaron como problema la exigencia de pruebas de embarazo en

algunos lugares de trabajo como condición para obtener y conservar un empleo.

c. Prohibición de trabajo forzado u obligatorio

Aunque la constitución y la ley prohíben el trabajo forzado u obligatorio, incluido el trabajo por la niñez, las mujeres y cada vez más los menores fueron traficados para fines de explotación sexual. El trabajo organizado determinó que las prácticas de trabajo extra obligatorio, que eran comunes en el sector privado, particularmente en los sectores de exportación, eran equivalentes a trabajo forzado u obligatorio.

d. Prohibición del trabajo infantil y edad mínima para el empleo

Aunque la ley prohíbe el empleo de menores de 14 años sin el permiso escrito de los padres o del Ministerio de Trabajo, el trabajo infantil era un problema generalizado. La ley prohíbe que los menores de 18 años de edad trabajen en establecimientos donde se sirvan bebidas alcohólicas, trabajen en condiciones insalubres o peligrosas y trabajen por la noche y horas extras. El día legal de trabajo para personas menores de 14 años es de seis horas, y para personas de 14 a 17 años es de siete horas. A pesar de estas protecciones, los niños trabajaban en promedio más de 45 horas a la semana.

La mayor parte del trabajo infantil tiene lugar en zonas indígenas rurales donde la necesidad económica ha forzado a los niños a complementar el ingreso familiar. Según el informe de la ENCOVI de 2006 preparado por el INE, el último publicado, se estima que 528.000 niños tenían que trabajar para sobrevivir. El trabajo infantil era común en las industrias de exportación. Los sectores informal y agropecuario empleaban habitualmente a niños menores de 14 años de edad, por lo general en pequeñas empresas familiares. Hubo informes fidedignos de que el trabajo infantil se empleaba en las empresas de elaboración de alimentos, productos frescos y producción de flores, así como en industrias de elaboración de grava y juegos pirotécnicos. El Ministerio de Trabajo estimó que unos 3.700 niños estaban ilegalmente empleados en la producción de fuegos artificiales.

El gobierno no aplicó cabalmente las leyes de empleo de menores. La situación se exacerbó por la debilidad de los sistemas de inspección laboral y de los juzgados de trabajo. Si bien, en casos excepcionales, la Inspectoría General de Trabajo puede autorizar a los niños menores de 14 años para trabajar, el

Ministerio de Trabajo se ha comprometido a abstenerse de dar esa autorización, de conformidad con el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Para mantener ese compromiso, la Inspectoría General de Trabajo informó que no había concedido ninguna de esas autorizaciones a fines del año.

El COE, en sus observaciones, expresó profunda preocupación por la situación de los niños menores de 14 años obligados a trabajar en el país, señaló que parecía muy difícil aplicar en la práctica las leyes nacionales sobre trabajo infantil y animó al gobierno a intensificar sus esfuerzos por mejorar la situación de los trabajadores menores de 14 años de edad.

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT siguió trabajando en programas para combatir la explotación sexual de los niños con fines comerciales, prestando ayuda al gobierno y a las organizaciones locales para fortalecer las leyes, las políticas y los programas pertinentes.

La Unidad de Protección al Menor Trabajador del Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de aplicar restricciones al trabajo infantil y de educar a los menores, a sus padres y a los empleadores acerca de los derechos de los menores en el mercado laboral. El gobierno destinó recursos insuficientes a los programas de prevención, pero la administración municipal de la Ciudad de Guatemala gestionó varios programas en pequeña escala que ofrecieron becas y alimentos gratuitos para animar a las familias a enviar a la escuela a los niños que antes habían trabajado en las plantaciones de brócoli y café y en las industrias de elaboración de grava y de fuegos artificiales.

e. Condiciones aceptables de trabajo

La ley fija un salario mínimo nacional en el sector agropecuario, en el sector no agropecuario y en las fábricas de vestuario. El salario mínimo diario fue de 52 quetzales (\$6,73) diarios por trabajo en los sectores agropecuario y no agropecuario y de 47,75 quetzales (\$6,18) diarios en las fábricas de vestuario.

El salario mínimo no ofrecía una condición de vida decente para un trabajador y su familia. El Instituto Nacional de Estadísticas estimó que el presupuesto alimenticio mínimo para una familia de cinco era \$256 (1.976,05 quetzales) al mes, 18,85 por ciento más elevado que en 2007. Los representantes laborales observaron que incluso cuando ambos padres trabajaban, el

salario mínimo no permitía a la familia satisfacer sus necesidades básicas.

El incumplimiento de las disposiciones sobre el salario mínimo en el sector informal estaba muy difundido. El Ministerio de Trabajo realizó inspecciones para vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre el salario mínimo, pero el gobierno no le asignó suficientes fondos para que los inspectores pudieran aplicar la ley sobre salario mínimo de forma adecuada, particularmente en el vasto sector informal. Los grupos de defensa que centraron su atención en los problemas del sector rural estimaron que más de la mitad de los trabajadores en las zonas rurales con empleos de todo el día no recibían los salarios, las prestaciones y las asignaciones del seguro social exigidos por la ley. Según estimaciones fidedignas, entre 65 y 75 por ciento de la fuerza laboral seguía trabajando en el sector informal y fuera de las medidas de protección básica concedidas por la ley.

La semana de trabajo legal es de 48 horas con un período de descanso mínimo de 24 horas pagado, aunque en ciertos sectores económicos, los trabajadores seguían trabajando conforme a una tradición de un horario de trabajo más prolongado. Los límites máximos de horas diarias y semanales no se aplicaban a los empleados domésticos. Se exigía el pago de tiempo y medio en el caso de trabajo realizado en horas extras. Aunque la ley prohíbe horas extras excesivas obligatorias, los dirigentes sindicales y los grupos de derechos humanos denunciaron que los empleadores obligaban a los trabajadores a laborar horas extras sin el pago adicional exigido por la ley. La gerencia solía manipular el transporte proporcionado por la empresa con el fin de obligar a los empleados a trabajar horas extras, particularmente en ZPE ubicadas en sitios aislados con pocas alternativas de transporte. Los inspectores laborales informaron que habían descubierto varios casos de abusos relativos a las horas extras, pero el debido cumplimiento con lo dispuesto se vio minado por multas inadecuadas, la ineficiencia del sistema de juzgados de trabajo y la renuencia de los empleadores a permitir la entrada de inspectores laborales a sus instalaciones o a proporcionar acceso a los archivos de la nómina y a otra documentación.

Los juzgados de trabajo tienen la responsabilidad de sancionar a los empleadores que violen las leyes laborales. Los inspectores laborales no tienen autoridad para adoptar medidas administrativas ni para imponer multas en el caso de violaciones laborales. Los juzgados de trabajo recibieron 1.619 casos de la Inspectoría General de Trabajo y dictaminaron a favor de la

reincorporación del trabajador en 571 casos. Sin embargo, las decisiones de los juzgados favorables a los trabajadores rara vez se cumplían porque a menudo los empleadores se negaban a acatar esas decisiones. Según informes, la gerencia o las personas contratadas por la gerencia hostigaban y amenazaban de muerte a los trabajadores que no aceptaban el despido del empleador o que se negaban a abandonar su derecho a la reincorporación.

El gobierno establece las normas de salud y seguridad ocupacionales, que eran inadecuadas y no se hacían cumplir a cabalidad. Cuando ocurrían accidentes industriales graves o mortales, las autoridades a menudo dejaban de investigarlos en su totalidad o de asignar responsabilidad por negligencia. Los empleadores rara vez recibieron sanciones por dejar de ofrecer condiciones de trabajo seguras. No se hizo cumplir la ley que exige a las empresas con más de 50 empleados que proporcionen servicios médicos internos a sus trabajadores. Los trabajadores tienen el derecho legal a retirarse de situaciones de trabajo peligrosas sin sufrir represalias. Sin embargo, pocos trabajadores estaban dispuestos a poner en peligro su empleo por quejarse acerca de condiciones de trabajo inseguras.